



Hugo Morán
Secretario de Estado de Medio Ambiente

“En España tenemos la posibilidad de construir tres grandes embalses: se llaman ahorro, eficiencia y reutilización”

Asturiano nacido en Lena en 1963, Hugo Morán Fernández accedió a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente hace ya cinco años y participó activamente, de la mano de la vicepresidenta Teresa Ribera, en la gestación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Con anterioridad, fue alcalde de su pueblo natal durante doce años, y presidió el Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos y el Grupo de Desarrollo Rural de Asturias. Es un hombre que conoce a fondo la política local y, por ende, la problemática rural, también las dificultades a las que se enfrentan los territorios que sufren escasez hídrica.

Morán confía en la innovación y en las decisiones basadas en el conocimiento para abordar el problema del agua en colaboración con la sociedad y todos los actores implicados. “Nos debemos apoyar en la ciencia y el mundo académico para sentar las bases sólidas del modelo más eficaz posible, que garantice una gestión sostenible, productiva, razonable, ecológicamente responsable y, por supuesto, solidaria, del bien común que es el agua, y por supuesto del derecho humano primordial que supone tener acceso a ella en cantidad, calidad y condiciones sanitarias dignas”, argumenta el secretario de Estado, quien destaca que, por primera vez, la planificación hidrológica que impulsa ahora el Ministerio incorpora de forma transversal la variable de cambio climático, los mecanismos de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos y el compromiso de la restauración ambiental de todas las cuencas hidrográficas.

—Nos enfrentamos a una reducción de recursos hídricos en toda España. ¿Debemos modificar nuestra forma de relacionarnos con el agua?

—En este caso creo que lo que hay que tener claro es que la curva de demanda de agua en España hace ya tiempo que sobrepasó la línea crítica y, por lo tanto, es evidente que hay que invertir esa curva; y hay que hacerlo lo antes posible. Esto ya sucedió en un momento en el que no teníamos incorporada la variable de cambio climático, con lo cual, en estos momentos, con la evidencia de los problemas que éste genera, la urgencia es mayor todavía.

Para esto no sirve el mensaje que se ha venido repitiendo durante mucho tiempo de que las cuencas excedentarias envíen agua a las cuencas deficitarias. No existen cuencas excedentarias en nuestro país; igual que ha desaparecido ya ese concepto en toda Europa. Todas las cuencas en estos momentos están en una situación de necesidad de adaptarse a unos escenarios de clima muy exigentes.

—¿Somos suficientemente conscientes de esta situación?

—Hay dos factores que hay que tener en cuenta a la hora de valorar si somos o no somos ya conscientes de ello. Y es que, en la medida en la que en cada territorio van surgiendo cada vez con mayor frecuencia problemas de acceso al agua en cantidad y en calidad, la conciencia se va extendiendo. Creo que lo que está ocurriendo ahora es que mientras que antes esta sensación se limitaba exclusivamente al período en el que había problemas de acceso al agua, ahora, a medida que se van repitiendo estos episodios y conforme se va constatando que la situación es igual en todo el país, creo que hay una conciencia ya instalada en el conjunto de la ciudadanía de que es necesario cambiar nuestro modelo de relación con el agua.

—¿De qué dependerá la disponibilidad del agua?

—De lo que ha dependido siempre. El agua es un recurso natural que está sujeto a ciclos de reposición no gestionables. Responde a fenómenos naturales que son cambiantes en los ciclos y que —mientras se han mantenido en unas inercias que estadísticamente más o menos eran constantes en el tiempo— tras cierto tiempo venía un periodo de sequía que luego se recuperaba con otro de lluvias y permitía que el equilibrio se restableciera.

Esta pauta natural más o menos equilibrada comienza a modificarse allá por la década de los 80, y lo que hemos visto es que los patrones de recurrencia de los fenómenos extremos, tanto de sequías como de inundaciones, comienzan a ser habituales. La disponibilidad de agua dependerá de los ciclos y factores cambiantes a los que siempre ha estado sujeta, pero lo que ocurre es que en esta nueva 'era hídrica' esa dependencia nos apunta a situaciones cada vez más complejas, más difíciles de gestionar.

—¿El cambio climático llevará a recortes en el conjunto de las demarcaciones? ¿Qué opciones tenemos?

—El cambio climático ya lo está provocando. En las estadísticas de tendencias de los últimos años y que se consideran a la hora de hacer la planificación, lo que se constata es que la curva es continuamente descendente.

¿Qué herramientas tenemos para poder hacer frente a la misma? Es evidente que las políticas clásicas ya no sirven. Seguir pensando que construir embalses o hacer trasvases va a resolver esa situación es engañarnos. No va a ser así la situación, ni a presente ni a futuro, porque ni va a haber agua para llenar esos embalses, porque ya ni somos capaces de llenar los que tenemos, ni va a haber agua para hacer trasvases, porque a estas alturas, por los ríos no circula ni siquiera agua para poder garantizar unos caudales ecológicos razonables.

¿Cuáles son las herramientas? Yo lo digo habitualmente: en este país y en el conjunto de las cuencas hidrográficas tenemos la posibilidad de construir tres grandes embalses. Esos embalses se llaman ahorro, eficiencia y reutilización, y aportan cada uno un volumen de agua de una envergadura similar a la de cualquier embalse convencional como los que conocemos.

—Lleva años conviviendo con los procesos de planificación hidrológica. ¿Lograremos desterrar el término 'guerra del agua'?

—Lo primero que hay que hacer es acotar el área del conflicto. En nuestro país se gestionan al año, aproximadamente y para distintos usos, unos 30 000 hectómetros cúbicos de agua. En este periodo de planificación hidrológica, al igual que en los anteriores, allí donde se produce una y otra, y una y otra vez, una discrepancia reiterada, es en relación con una sola infraestructura: el trasvase Tajo Segura. En estos mo-

mentos, de media, a lo largo de los últimos años, el trasvase de Tajo Segura —y ésta es una cifra que se consolida—, gestiona unos 300 hectómetros cúbicos al año. Concluir, como se pretende concluir, en relación con un problema concreto, que en este país hay algo que pueda ser elevado a la categoría de guerra del agua, es sobredimensionar un conflicto que tiene su importancia, pero que está acotado en el territorio y frente al cual hay respuestas operativas de gestión.

Con lo cual, iniego la mayor! En este país no hay una guerra del agua. Guerras del agua hay en otros países, con lo que mantener ese concepto y utilizarlo significa, en algunos casos, ni más ni menos que degradar los problemas que de verdad supone el agua en países que efectivamente están en guerra por el agua, porque no disponen de ella.

—Para acabar con conflictos entre usuarios y territorios, ¿cómo debemos entender la planificación hidrológica?, ¿hay que cambiar la cultura actual en torno al bien agua?

—Lo primero que necesitamos para que una sociedad sea consciente en ese ámbito de la planificación es que las respuestas que se dan desde la Administración sean las más adecuadas para los problemas que se pretenden solucionar: se necesita información y transparencia —la fiabilidad de los datos es fundamental— y, a partir de ahí, instrumentar los mecanismos de gobernanza del agua. ¿Cómo se resuelve esto? Con información clara y fiable transmitida al conjunto de la ciudadanía. ¿Qué hay que pedir en ese escenario? Que todos los agentes que participan en este proceso cooperen en esa misma dirección.

—¿Hacia dónde nos llevan los nuevos mecanismos de planificación hidrológica que se han aprobado? ¿Todas las cuencas hidrográficas y los ciudadanos a los que les afecta están en igualdad de condiciones?

—Se ha establecido un modelo de éxito que España exportó y que en estos momentos se asienta en la cultura de la gestión del agua a nivel internacional, que es el principio de la Unidad de Cuenca. ¿Por qué el Principio de la unidad e cuenca? Primero, porque un río no es una infraestructura que pueda ser gestionada de forma diferente en función de cuáles son las fronteras administrativas por las que discurre. Un río tiene que ser gestionado de forma unitaria desde su cabecera hasta su desembocadura. Cada cuenca es diferente, por lo que tenemos que tender a que toda la población que depende de una cuenca hidrográfica tenga un tratamiento homogéneo. Pero esto no quiere decir que toda la población de las distintas cuencas tenga un tratamiento homogéneo. Las circunstancias no son iguales en cada cuenca hidrográfica.

Uno, por razones geográficas, meteorológicas y climáticas; y dos, por razones tecnológicas. Por ejemplo, no podríamos

dar una respuesta de garantía gestionable de suministro mediante el uso del agua desalada a territorios que están alejados de la costa. Eso es inviable. Cada cuenca tiene que atender a sus propias condiciones para poder establecer los mecanismos de respuesta. Y ahí sí, el conjunto de los ciudadanos tiene que tener ese tratamiento; ahí sí hay un principio que debe ser igual para todos los ciudadanos con independencia de donde vivan, y es el derecho al agua que consagra Naciones Unidas en el año 2010: todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al agua y al saneamiento en unas condiciones razonables de cantidad, de calidad y de precio.

—¿Qué medidas destacarías en la planificación hidrológica?

—La primera de todas es que por primera vez la planificación que impulsamos incorpora de forma transversal la variable de cambio climático en el proceso de planificación; además, un compromiso en relación con la restauración de la calidad ambiental de todas las cuencas y, finalmente, un mecanismo de respuesta a los fenómenos extremos, tanto inundaciones como sequías. Creo que esos son los elementos más destacables.

—Digitalización, innovación e información sobre el agua. ¿En qué orden los pondría?

—La digitalización no deja de ser un mecanismo de innovación para incorporar a la gestión. En estos momentos, la tecnología y la digitalización son el salto cualitativo en innovación que necesita la gestión del agua. Y, evidentemente, la digitalización va a proporcionar una plataforma de información, ya que no es sólo una herramienta de gestión sino que es una herramienta de gestión pero además abierta a la participación.

Y ésa es la vocación que tenemos cuando ponemos en marcha el PERTE de digitalización: que las administraciones tengan información veraz en tiempo real, pero que esa información sea accesible al conjunto de los ciudadanos para que puedan contrastar que efectivamente la planificación que se ha hecho es correcta y la gestión de esa planificación también es la adecuada.

—Un informe del Consejo General de Economistas de España señala que la 'guerra del agua' se libra entre las regiones con peores modelos de financiación.

—Ese informe ya aterriza y acota, ya lo ubica territorialmente en un punto concreto. No tiene que ver con esa situación. En absoluto. Las necesidades de implementar medidas para cubrir la demanda, las garantías de suministro, se extienden al conjunto del país y siempre generan dificultades a la hora de abordar esas respuestas. Tenga-



Hugo Morán junto a Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, a las puertas del Miteco.
Foto: María Márquez

mos en cuenta que en España existen del orden de unos 100 trasvases, en la mayoría de los casos para atender suministros de agua de boca. En todos estos casos generan algún conflicto de gestión en el territorio, como la construcción de cualquier otra infraestructura o la ubicación de cualquier otro equipamiento.

Es verdad que el agua es un bien escaso y es indispensable para la vida y, por lo tanto, cuando falta el agua, cualquier otro problema pasa a ser secundario y el agua se convierte en el principal problema. Estamos acostumbrados a tener una capacidad de respuesta en España, país en el que esto hace tiempo que dejó de ser un problema general. En muy raras ocasiones se produce una situación de estas características pero, cuando se produce, evidentemente se convierte en el problema principal y, por lo tanto, es al primero al que tienen que atender las administraciones. Pero no tenemos que tender a elevar a categoría de conflicto lo que no es más que un proceso de gestión ordinaria.

—Murcia está siempre en el epicentro del debate con la situación del Tajo. ¿Tiene motivos para preocuparse?

—Como sociedad tenemos motivos para preocuparnos. Todos. Aquí nadie tiene motivos para preocuparse más que otros, pero tampoco nadie tiene motivos para despreocuparse. Vamos hacia escenarios cada vez más complejos. Y me remito a ejemplos muy recientes: el presidente de la República de Francia acaba de hacer un llamamiento a la ciudadanía en función de una crisis. En Italia están teniendo serios problemas de abastecimiento. Este verano se han visto problemas con el agua en Alemania, en Reino Unido... Todo el mundo tiende a dar prioridad al problema que sufre directamente, y lo que no podemos es cerrar los ojos a lo que sucede más allá de nuestro espacio de proximidad, con lo cual Murcia no tiene por qué preocuparse más que nadie, pero debemos tener en cuenta que nuestros escenarios de gestión son los que son y, por lo tanto, habrá que pensar que todos tenemos que ser responsables en el proceso de toma de decisiones.

Si nos referimos al hecho concreto del mensaje recurrente, de que un gobierno socialista —cada vez que estamos en campaña electoral— se titula en los medios: ‘El Gobierno socialista va a acabar con el trasvase Tajo Segura’, yo siempre digo lo mismo: no nos perdamos en discursos vacíos. Vayamos a los datos. En el periodo 2014-2018 se trasvasaron —en este caso a través de la infraestructura del Tajo Segura— 829 hectómetros cúbicos. En el periodo que va de 2018 a 2022 se trasvasaron 1 229 hectómetros cúbicos. La realidad es esa. Todo lo demás es intentar construir una ficción para apoyar un discurso que no tiene una base sólida.

—¿Podríamos decir que el cambio climático, con cada vez menos agua en cabecera, acabará con este trasvase Tajo Segura?

—Podemos decir que el cambio climático va a condicionar la realidad que hemos conocido durante décadas en todas las cuencas hidrológicas de nuestro país.

—Agua y regadío es un binomio complicado. ¿Hay que reducir las hectáreas de regadío para garantizar la sostenibilidad del sector? Algunos regantes señalan que también son gestores del agua...

—Los primeros que son conscientes de que vamos a un escenario cada vez más exigente de disponibilidad de agua son aquéllos que dependen del agua para desarrollar su actividad. Tan es así que ya, a lo largo de los últimos años, el sector del regadío ha incorporado como actividad principal, en términos estratégicos, la modernización de regadíos. Uno de los componentes que conlleva la modernización de regadíos es reducir los volúmenes de agua necesarios para producir lo mismo. Ese esfuerzo tiene sus resultados, pero probablemente llegará un momento en que no sea suficiente para compensar la disminución de agua disponible. Por ello, hay que tener en cuenta que nunca la planificación agraria va a poder condicionar la planificación hidrológica, sino que es y debe ser al revés: la planificación hidrológica es aquella que debe poner los límites a la planificación agraria.

¿Qué es lo que habrá que hacer a futuro? Estudiar y analizar cómo evoluciona la planificación hidrológica y, en función de esa evolución, adaptar la planificación agraria. Ése es el mejor seguro, la mejor garantía de que vamos a seguir teniendo una agricultura sostenible en términos ambientales, en términos sociales, pero también en términos económicos.

—¿Las concesiones de agua se adaptarán al nuevo escenario de falta de recursos? ¿Habrá recortes?

—Hay un término, el de la adaptación, que se ha incorporado en relación con la gestión climática. Empezamos con un término, el de la mitigación, muy conocido. Se ha hecho un enorme esfuerzo a lo largo de los últimos años —con compromisos internacionales— para intentar invertir la curva de las emisiones, pero sabemos lo que dice el IPCC: que la inercia de los procesos de calentamiento se va a mantener en el tiempo, con independencia de que seamos capaces de reducir las emisiones a los límites que nos hemos marcado y conseguir estancar el incremento de temperatura por debajo del 1,5.

Alcanzado ese objetivo es cierto que se va a seguir produciendo esa situación a futuro. Con lo cual, con lo que nos vamos a



encontrar es con que los escenarios de clima son los que van a marcar las disponibilidades de agua. Eso va a suceder. No descubrimos nada. Es lo que está sucediendo ahora mismo. Ésa es la realidad con la que vamos a tener que contar. A partir de ahí hay cosas que debemos tener claras. No cambian las prioridades de acceso al agua o de destino del agua en función de que haya más o menos. Hay un orden de prioridades, un orden de jerarquías, y ése es el que hay que mantener.

—Las hidroeléctricas también se tendrán que adaptar. ¿Qué se está haciendo al respecto? Y sobre la modificación del texto de la Ley de Aguas...

—Cuando hablamos de adaptación tenemos que hablar de adaptación en absolutamente todos los ámbitos que afectan al día a día. No podemos pensar que una estructura de concesiones de agua, que está diseñada a mediados del siglo pasado, incluso antes, cuando no estaba incorporado el elemento de cambio climático en ese proceso, sea la adecuada, operativa y eficiente ahora. No podemos pensar que las concesiones son inmunes al cambio climático. Hay que evolucionar. Hay que adaptar.

Si hay que revisar los usos, las actividades, es lógico que las concesiones también estén sujetas a ese proceso de adaptación al fenómeno del cambio climático. Si estamos hablando de que en el mundo financiero, el mundo de la empresa con carácter general, tiene que poner en marcha mecanismos de adaptación, el mundo de las concesiones tiene que tener también incorporada esa mentalidad.

—El ciclo urbano del agua tiene un gran problema de pérdida de recursos. ¿Hay que mejorar las redes de abastecimiento?

—Sí, indudablemente. Como comentaba, uno de los grandes embalses que tenemos que construir en nuestro país es de la eficiencia y el del ahorro. Hay un enorme volumen

de agua que se pierde en las redes como consecuencia de que, o bien son infraestructuras obsoletas o son infraestructuras sobre las que no hay un control eficiente sobre cuál es su situación en cada momento. No se identifican las pérdidas. Entonces... Por supuesto: hay que intervenir ahí.

De hecho, uno de los componentes del PERTE de digitalización va precisamente dirigido a poder tener un conocimiento real en tiempo de qué es lo que está sucediendo en las redes, de tal manera que se puedan dar respuestas de intervención lo más rápidas posibles. Tenemos que pensar que nos movemos en unos niveles de pérdidas de entre el 15 % y, en algunos casos, el 60 % de fugas. Es decir, una red de abastecimiento que pierda el 60 % del agua es evidente que en algún momento dejará de tener capacidad para garantizar el suministro. En términos ambientales es un despilfarro y un sinsentido, pero en términos económicos y sociales también lo es.

—¿Cómo vamos en reutilización del agua?

—Razonablemente bien y avanzando, pero nos queda bastante recorrido por hacer. Hay algunos elementos de mejora, de modernización de las infraestructuras, que tienen que ayudarnos precisamente a incorporar el elemento reutilización como





Morán deja claro que la planificación hidrológica debe poner los límites a la planificación agraria

una fuente de suministro más. Una de ellas es una mejora progresiva en los sistemas de depuración de las aguas. Si conseguimos ir mejorando los estándares de depuración iremos teniendo aguas de mayor calidad y aguas que serán útiles para determinados usos que nos permitan no tener que exprimir aún más las fuentes vírgenes, que se utilizan a menudo para usos no relacionados con el consumo humano o productivo, lo cual es absurdo en términos ambientales. Regar, lavar, baldear ciudades con agua potable y apta para el consumo no tiene ningún sentido —si hay otra alternativa— en ningún lugar, pero menos en un país que sufre estrés hídrico

—Y sobre el reto de la gestión hídrica y el necesario desarrollo rural y freno a la despoblación...

—Éste es uno de los elementos en los cuales pusimos un mayor énfasis. No hay que olvidar que éste es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con lo cual es evidente que el concepto reto demográfico permea todas las políticas. Y en el caso del agua, ha sido uno de los elementos en los cuales quisimos intensificar el trabajo y la acción. De hecho, por primera vez desde este Ministerio se han puesto en marcha líneas de financiación para los pequeños y medianos municipios con el objetivo de apoyar las inversiones en infraestructuras de agua, tanto en el abastecimiento como en el saneamiento y la depuración.

Pero también tenemos que saber ver, y tener en consideración que, por primera vez, la puesta en marcha de líneas de actuación, de inversión, de modernización, se hace teniendo en cuenta que se van a acometer las inversiones en paralelo en las grandes ciudades, en las pequeñas poblaciones y en los municipios de menor tamaño.

Éste es el PERTE de digitalización. La digitalización va a llegar al mismo tiempo al municipio más pequeño y a la gran

ciudad. Con lo cual, ¡sí!: la política del agua que hemos puesto en marcha ha dado un vuelco a la hora de que entendamos que deben ser consideradas obras de interés general del Estado aquellas actuaciones que han de ir dirigidas a los municipios que menos capacidad tienen para invertir y que, por lo tanto, más necesitan de la solidaridad de los presupuestos.

—Hablamos principalmente de sequías cuando se sufre escasez, pero también sufrimos inundaciones que provocan daños y pérdidas muy importantes...

—Sí, ésta es la doble componente de lo que suponen los impactos del cambio climático. Y no olvidemos que las inundaciones suponen en estos momentos el fenómeno que genera mayores pérdidas de todo tipo: económicas, en infraestructuras, e incluso en ocasiones, de vidas humanas. Por lo tanto, se convierte en una de las grandes preocupaciones a las que debe prestar atención el conjunto de países de la Unión Europea. En ese sentido, este Gobierno ha incorporado un catálogo con una actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones y una línea específica de intervención dentro de la planificación hidrológica para el tercer ciclo que ahora iniciamos.

—Sobre la importancia de la responsabilidad colectiva en la preservación del agua... ¿Falta educación ciudadana? ¿Paga un precio justo por el agua o habría que incrementarlo?

—Lo primero que habría que saber, y compartir todos, es cuál es el precio justo del agua. En función de cuál sea la relación de un ciudadano, de un territorio con mayor o menor disponibilidad de agua, ese territorio, esa sociedad, estarían dispuestos a pagar un precio mayor en comparación con otros en los que no tienen ese problema de acceso. Esto nos obliga a establecer un mecanismo de equilibrio. Ya lo adiviné y lo incorporó la Unión Europea en su momento en la Directiva Marco del Agua.

Hay un principio que es el de la recuperación de costes que establece la obligación de que se implemente en las tarifas el coste real de lo que supone dar la garantía de suministro. Esto suma la gestión del agua, la amortización de las infraestructuras del agua y, en cierta medida, también los costes ambientales del agua.

En nuestro país hemos recibido llamadas de atención de la Comisión Europea porque se entiende que no hemos implementado razonablemente el principio de recuperación de costes. Hemos comenzado a implantar con carácter general el principio de recuperación de costes en esta legislatura. Y ya no hay marcha atrás, porque los momentos de aportación de fondos europeos para financiar infraestructuras del agua están vinculados, precisamente, a la aplicación de ese principio. Llegará un momento, que está cada vez más cerca, en que los pre-

supuestos europeos dejarán de aportar financiación porque llegado ese punto deberíamos haber alcanzado el equilibrio, ése en el cual lo que se paga por el agua es suficiente como para mantener la seguridad del suministro del agua.

—Sobre espacios como Doñana, Las Tablas de Daimiel o el Mar Menor, ¿se tomarán medidas más estrictas en cuestiones como el robo del agua o actividades que impliquen perjuicio sobre la calidad ambiental de estos humedales y lagunas saladas?

—Casi me atrevería a decir que estos espacios son el termómetro que nos indica cómo estamos de salud hidrológica en nuestro país. Son espacios de alto valor, muy visibles, en los que se pueden contrastar de forma mucho más palpable los errores que se cometen en relación con el uso, o con la sobreexplotación del agua, pero no es un problema que se limite a estos territorios. En esos espacios naturales se hace muy evidente por sus propias condiciones de visibilidad, dentro y fuera de nuestro país. Y eso nos obliga, en primer término, a abordar planes de intervención específicos diseñados para corregir esa situación. Y sí, se están haciendo.

Tanto las Tablas de Daimiel, como Doñana, como el Mar Menor o como la Albufera de Valencia cuentan con planes de actuación. Prácticamente la búsqueda de soluciones a los problemas singulares de todos estos humedales los hemos impulsado desde este ministerio. Son, de alguna manera, los escenarios piloto que nos sirven para identificar cuál debe de ser el modo de gestión del agua en el conjunto de nuestro país.

—Los ríos son un elemento geomorfológico y ambiental vertebrador, que comunican territorios y equilibran ecosistemas interrelacionados. ¿Hasta qué punto es importante cerrar el ciclo y aplicar una buena gestión para que el agua fluvial llegue en cantidad y calidad al mar?

—Creo que a veces se acuñan términos que por alguna razón acaban teniendo éxito, por más que sean muy desafortunados. Hay uno que se utiliza muy a menudo el de que “los ríos tiran el agua al mar, un agua que podría ser aprovechada para otros usos”.

Los ríos vienen a ser como el sistema sanguíneo del país y, en cualquier sistema sanguíneo, si tú cortas el recorrido, lo que generas es un problema en una parte del cuerpo. En el país pasa exactamente lo mismo. Si tú interrumpes el riego sanguíneo de un río, lo que ocurre es que allí donde no llega el agua o donde no llega ese riego suficiente se genera un problema, se produce una enfermedad en esa parte del territorio. Los ríos son ríos desde su nacimiento hasta su desembocadura y aportan vida en todo su recorrido, desde el nacimiento hasta la desembocadura y más allá, siendo imprescindible su aportación

de agua que transporta sedimentos, nutrientes, minerales y organismos en las desembocaduras. Elementos orgánicos y minerales que forman parte del ciclo global de la hidrosfera y de la biosfera. Imprescindibles para la salud ambiental global.

Los ríos constituyen uno de los elementos básicos para sustentar dos actividades que, en un país como España, volcado al mar, son muy importantes. Un país que tiene una estructura de oferta turística muy vinculada al modelo de sol y playa tiene que ser consciente, por poner un ejemplo, de que las playas se sustentan si los ríos aportan sedimentos suficientes en las desembocaduras. Si cortamos el aporte sedimentario estamos perjudicando la estabilidad de esas playas y, por lo tanto, estamos penalizando a un sector económico muy importante para este país. Y lo que incluso es peor a largo plazo: si interrumpimos la llegada de agua al mar estamos colapsando el ciclo de vida que permite tener bancos de pesca y unos mares saludables y equilibrados, lo cual en nuestro país constituye un elemento muy importante de actividad económica.

Si no somos capaces de entender lo que supone en el ciclo completo de vida un río, si atendemos solamente a una cuestión concreta, en un punto concreto, una actividad concreta, estaremos cometiendo un gravísimo error de planificación como país. Y, por supuesto, lo que estaremos será hurtando posibilidades de sostenibilidad de otras actividades econó-



Este asturiano mira al futuro con la esperanza de consolidar un sistema hidrológico ecológicamente responsable y solidario

micas que viven de ese riego sanguíneo. Por no hablar de las irreparables consecuencias ambientales y el daño que generaría —que está generando diría yo porque está científicamente demostrado—, a la biodiversidad fluvial y marina, por ejemplo, a la pervivencia y salud de las poblaciones de las especies anádromas, como el salmón atlántico o el reo, que se alimentan en el mar, pero que frezan y se reproducen en las cabeceras fluviales, a las que cada vez tienen más dificultades para ascender por culpa de una gestión inadecuada de las infraestructuras. Y además, a todo un ecosistema armónico en el que intervienen organismos vivos, vegetales y animales, incluso microorganismos imprescindibles para que funcione el ciclo natural, que como es sabido interactúan con todas las especies de la cadena trófica, vitales además para la buena salud del agua, dulce y salada.

—La contaminación agraria provocada en los recursos hídricos naturales es otro gran problema, y un reto frenarla...

—Éste es un problema global, que afecta al conjunto de países de la Unión Europea, y nosotros no somos ajenos a ello. Quizá por ausencia de conocimiento, por falta de regulación, a lo largo de muchos años se ha venido produciendo déficit de incorporación de prácticas adecuadas en la actividad agraria y esto se ha traducido en aportaciones excesivas de nutrientes, de pesticidas, de nitratos, de elementos que contaminan y alteran la composición natural de las masas de agua...

Pero hay soluciones. Se está haciendo en estos momentos un avance considerable de adaptación en términos de sostenibilidad ambiental de la actividad agraria a lo que debe de ser un

sostenimiento adecuado de uno de los elementos indispensables también para la actividad agraria, el agua de calidad.

Se ha dado un salto cualitativo, en estos momentos con el último plan estratégico de la PAC implementado en España; alineando las normativas y las prácticas agropecuarias, cada vez más, con el conjunto de políticas protectoras del agua que la Unión Europea ha puesto en marcha. La estrategia 'de la granja a la mesa', por ejemplo, creo que es una acción muy importante en esa dirección. Pone de manifiesto lo que efectivamente ya estaba probado: el sector agrario ha de convertirse en una de las herramientas fundamentales para poder mejorar la calidad de las aguas, sean subterráneas, someras, manantiales o fluviales, si es que queremos seguir teniendo un sector agrario saludable y sostenible de cara al futuro. Porque depende no sólo del volumen de agua disponible, sino de su calidad y accesibilidad.

—La declaración de Naciones Unidas considera el agua como un derecho humano. ¿Hemos pasado de una declaración de intenciones a una realidad o queda camino para garantizarlo? Se habla mucho de pobreza energética pero, ¿nos olvidamos de la pobreza hídrica?

—Si hacemos un análisis en clave global, es evidente que no se ha traducido. Hay muchas regiones del planeta en las cuales en estos momentos el Derecho al Agua no pasa de ser una mera declaración que no se traduce en algo efectivo. Hay extrema pobreza hídrica en muchas zonas del planeta: es evidente. Y es un gran problema global, que trasciende a lo económico para convertirse en una prioridad humanitaria y de

justicia social. Nadie lo duda. No es tolerable que millones de personas no tengan acceso al agua potable y al saneamiento. Éste es un reto y una obligación moral pendiente de resolver a nivel internacional. España hace todo el esfuerzo que está a su alcance para contribuir a impulsar soluciones que mitiguen el sufrimiento que provoca la escasez de agua.

Pero centrando la cuestión, si descendemos al ámbito europeo, creo que en estos momentos puede considerarse que es un derecho que está razonablemente garantizado. En España, forma parte de una de las estrategias del Gobierno atender a los colectivos más vulnerables a la hora de garantizar todo tipo de derechos, y el derecho de acceso al agua es uno de ellos.

Ésta fue una de las preocupaciones principales que ocuparon al Gobierno cuando nos enfrentamos a la pandemia de la covid-19. Uno de los elementos estratégicos de garantía de suministro de servicios básicos fue el del agua. Se establecieron normativas e instrucciones para que nadie, con independencia de cuál fuese su situación, pudiera ser privado del acceso al agua durante aquel tiempo. Eso se consiguió mediante un compromiso compartido de operadores públicos, operadores privados, del conjunto de las de las administraciones... Ahora, en la línea de consolidar el derecho al agua, ya empieza a ser un elemento que aparece recogido en la legislación de nuestro país. El Ministerio de Sanidad, en una iniciativa compartida con este ministerio, acaba de actualizar las normas del agua para adaptarlas a la correlación salud y agua y ahí, por supuesto, figura recogido con carácter legislativo el derecho al agua.

—Pero nos olvidamos de esta evidente pobreza hídrica, y se habla e informa más de la energética...

—Es por una razón lógica: el conflicto de la invasión de Ucrania, que generó un problema de acceso a la energía. Era necesario dar una respuesta de carácter europeo porque la energía no se gestiona en términos de demarcaciones. Hay un modelo de interconexión que ha venido construyéndose a lo largo del tiempo en el cual los territorios aspiran a no convertirse en islas energéticas. Eso es lo que da robustez. Cuando eso se pone en peligro, evidentemente, se convierte en una noticia de alcance internacional.

Como la gestión hídrica no responde a esos mismos parámetros, pues la gestión del agua responde al concepto de unidad de cuenca, es difícil entender una situación de crisis de esas características. Esto había sido así hasta ahora, pero empieza a convertirse en un problema global cuando todo un conjunto, todo un territorio, toda una región como es Europa, en un momento concreto, está sometida a un proceso de estrés hídrico al mismo tiempo y durante un largo periodo temporal; y eso es lo que ha sucedido en el último verano.



Para el Secretario de Estado, los ríos son como el sistema sanguíneo del país: "si cortas el recorrido, lo que generas es un problema en una parte del cuerpo"

Todo apunta a que esta coyuntura de estrés hídrico generalizado puede ir repitiéndose en el tiempo. Entonces, si no queremos encontrarnos en un momento determinado, en una situación en la cual hayamos de dar una respuesta urgente —a toro pasado a una necesidad de estas características—, tenemos que ser conscientes de que ese problema ya está aquí y requiere de respuestas, soluciones y acciones eficaces, urgentes e imprescindibles. En la medida de lo posible debemos anticiparnos para aportar soluciones y prevenir problemas futuros. De cualquier manera, el concepto de pobreza hídrica ya está aquí; y llegamos, todos, tarde.

—¿Cuál es el escenario que le gustaría contemplar?

—Un escenario en el cual todos seamos capaces de asumir qué es lo que sirve para hacer una buena gestión del agua: la herramienta más útil es la que nos aporta la ciencia, la que nos ofrece el conocimiento, la que nos facilitan los datos obtenidos tras una correcta planificación.

Dicho aún más claro: si cada vez dejamos menos hueco a los intereses de carácter político y electoralista en relación con el agua y somos capaces de implantar criterios razonables por encima de cualquier interés ajeno a la gestión hídrica eficaz, sólidamente fundados en la voz de la ciencia, estaremos respondiendo mejor a las necesidades sociales.

A mí me gustaría disfrutar un escenario en el cual todos fuéramos capaces de asumir, de interiorizar, de entender, que los diagnósticos del mundo científico, del mundo académico, son las bases sólidas sobre las que basamos, y aceptamos, el modelo más eficaz a aplicar para la gestión sostenible, productiva, razonable, ecológicamente responsable y, por supuesto, solidaria, del bien común que es el agua, con mayúsculas, y el Derecho Humano inalienable y global que supone el acceso a ella. También con mayúsculas.

Charo Barroso



Visita a los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en Córdoba